

El camino de las mujeres en el acceso al poder en México: sus prácticas político-culturales

Introducción

Las mujeres se han enfrentado a diferentes obstáculos para acceder al poder, sustancialmente porque históricamente se les ha ubicado en espacios privados, alejados de aquellos en donde se forma y desarrolla la ciudadanía. En este trabajo se presentan algunas de las prácticas político-culturales que las mujeres han emprendido para transformar las relaciones de poder que las colocan en desventaja, frente a los hombres, modificando las normas jurídicas que les impedían ser consideradas para participar en la vida política y ocupar cargos de representación popular. Asimismo, los avances que han logrado con los cargos de representación popular que han ido obteniendo desde el año 2000 a la fecha.

Prácticas de las mujeres en el acceso al poder

Las mujeres han tenido que ir abriéndose camino para acceder al poder, a partir de sus prácticas políticas de acción directa, es decir, prácticas en las que han sido agentes protagonistas, que a su vez les permitieron reconocer y transformar su posición que ocupaban dentro del régimen de representación político electoral. Las prácticas políticas les permitieron hacer visible las diferencias desfavorables de la participación y las articulaciones concretas que les adjudican una posición disminuida en un orden político (Velázquez, 2013).

La acción de las mujeres en numerosos mítines, manifestaciones y huelgas fue censurada e intimidada hasta con encierros y torturas (Castaño, 2016), sobre todo, porque dominaba en las sociedades y sus Estados, el presupuesto de que la política no pertenecía a la esfera natural de las mujeres. Pautas culturales y prácticas informales les limitaron el ejercer sus derechos políticos y las posicionaron subordinadamente; al asignarles el rol reproductivo, el trabajo doméstico y el

cuidado de la familia. Un estereotipo en el que no toman decisiones y su trabajo no es reconocido, valorado ni remunerado; alejado del espacio público y de la participación ciudadana.

Las mujeres lucharon por tener los mismos derechos políticos que tenían los hombres, a quienes se les atribuyó autonomía e igualdad; así como el desarrollo de todas las actividades inherentes al espacio público. Esta distribución del espacio, tiempo y actividades a mujeres y hombres se materializó en lo simbólico, cultural, jurídico e institucional y en el entramado social “informal”; por lo que las desventajas para las mujeres en relación con los hombres se reprodujeron en lo formal e informal.

En lo informal, existen creencias de que las mujeres tienen menos derechos políticos, autoridad y dominación. Son más sumisas e inferiores y, en general, cuentan con menos capacidades y habilidades que los hombres para ejercer el poder público. Por lo que cuestionan el que las mujeres se quieran dedicar a la política y cuando lo hacen ponen en duda su competitividad, además, tienen que seguir haciendo los quehaceres y cuidados del hogar y sus integrantes; de lo contrario son señaladas como mujeres “malas”.

En lo formal, las normas y el entramado institucional que las instrumenta, así como los acuerdos, son escritos y favorables para la participación masculina, en tanto protagonistas del debate político. Mientras que las mujeres no son tomadas en cuenta como actoras políticas ni ciudadanas.

La lucha de las mujeres al poder inició con las sufragistas, mujeres de clase media y alta que se organizaron en diferentes partes del mundo para obtener el reconocimiento de sus derechos políticos por parte del sistema imperante en el siglo XIX. Posteriormente, se continuó la organización que exigiría el voto y algunas medidas jurídicas para obtener candidaturas en puestos de elección popular.

El voto

La primera conquista que obtuvieron las mujeres en el mundo fue el derecho al voto, convirtiéndose en la entrada para reconocer su ciudadanía que supuestamente derivaría en los demás derechos. En 1893, en Nueva Zelanda, se reconoció por primera vez el voto de las mujeres, aunque faltarían décadas para lograr las candidaturas femeninas. En México, las sufragistas, al igual que en los otros países del mundo, lucharon incesantemente por hacer extensivo a todas las mujeres, ámbitos de mayor libertad individual y también garantías democráticas formales (Cano, 2013); en 1929 crearon el Primer Consejo Nacional de Mujeres, que más tarde cambió su nombre al Consejo Feminista Mexicano mediante el cual demandaron que las mujeres tuvieran el derecho a ser elegidas en cargos administrativos y de representación parlamentaria; en 1927 la fundación de la Liga Orientadora Feminista Socialista para luchar a favor de la equidad de salario y en el seno de los sindicatos, que posteriormente, en 1931, se transformó en la Liga de Acción Femenil; y en 1935 se formó el Frente Único Pro-Derechos de la Mujer, cuya preocupación central fue el derecho de voto (Girón, González y Jiménez, 2008)

Para 1947 las mujeres lograron el derecho de voto y ser candidatas en las elecciones municipales, posteriormente, por la presión que ejercieron en colectivos y organizaciones sufragistas, obtuvieron el derecho voto universal y también el derecho a ser candidatas en las elecciones nacionales, ambos en 1953; pero fue hasta 1955 cuando pudieron ejercer el voto por primera vez en elecciones intermedias, y en 1958 en la elección presidencial.

La práctica política ejercida por las mujeres en su lucha por el sufragio las ubicó en una posición de subordinación que intentarían cambiar, a partir de analizar y ver un mundo en el que las mujeres estarían constituidas como sujetos activos que cuestionarían e interrogarían a la sociedad y a ellas mismas sobre lo que eran, hacían, pensaban y decidían; lo cual redundaría en su organización social y el mundo inmediato que definía sus formas de vida y reproducción. La acción de las

mujeres construyó su identidad colectiva, perspectivas feministas y reivindicaciones (De Miguel, 2000).

En México es en la década de los setenta cuando se abre un gran panorama en la organización feminista y de acción para transformar las relaciones de poder como dominación sobre las mujeres. En 1975 se celebró la Conferencia del Año Internacional de la Mujer con sede en México y, posteriormente, quedó asentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento de la igualdad jurídica. En 1988 se crea el Frente de Mujeres en Defensa del Voto Popular y Mujeres en Lucha por la Democracia.

En la década de los noventa se empezó a diversificar el movimiento feminista con la incursión de las mujeres en diversos ámbitos como el ecologista, cultural, indigenista. No obstante, esta diversificación de énfasis problemáticos, podemos identificar algunos fundantes o transversales que cruzan las relaciones de género en las diversas sociedades y uno de ellos es justamente el acceso efectivo al poder; el cual, a su vez, ha mantenido como uno de los objetivos políticos transformar las relaciones de poder; de allí que la década se le llama de la construcción del feminismo como una fuerza política y democratizadora capaz de establecer interlocución con el Estado (Torres, 2009).

Las mujeres han ido alcanzando gradualmente sus derechos políticos y sociales, a través de sus incesantes luchas y movimientos para transformar su posición de subordinación a la de agentes de cambio. La institucionalización es la muestra fehaciente, la cual se traduce en convenciones, leyes, normas, cambios en las agendas institucionales, creación de instancias, políticas y programas específicos, así como la asignación de recursos al avance de la situación de las mujeres.

Las cuotas

Las cuotas son medidas que obligan en este caso, a incorporar mujeres en las listas de candidaturas o en la titularidad de las listas electorales. Lo cual significa que un

nivel es dirigir la pugna inter o intra partidaria con el liderazgo de una mujer en las listas, y otro nivel es estar incorporadas de manera subordinada a titulares hombres en las listas electorales. La cuota como acción afirmativa fue temporal porque su vigencia estuvo sujeta a la superación de los obstáculos que impedían una igualitaria representación de mujeres y hombres en los espacios de poder y representación política (Barreiro y Soto, 2000). Una cuota electoral de género exigía un porcentaje determinado para la representación femenina y tenía como objetivo a corto y mediano plazo garantizar la participación al menos igualitaria y efectiva integración de mujeres en cargos electivos de decisión de los partidos políticos y de gobierno efecto en los ámbitos políticos del Estado.

La discusión respecto a las cuotas giró en torno a los ámbitos de aplicación, porcentaje de la cuota, accesibilidad, procedimientos, la duración de las medidas y la garantía de su aplicación. Las cuotas pueden ser ordenadas ya sea por la constitución o por la ley electoral y también pueden ser decididas voluntariamente por los partidos políticos. En muchos países europeos las cuotas de género fueron introducidas por primera vez, voluntariamente por los partidos políticos en la década de los setenta y ochenta; por ejemplo, en Dinamarca varios partidos políticos utilizaron cuotas de género voluntarias con umbrales mínimo de 40% de candidatas desde finales de la década de 1970 hasta la década de 1990; posteriormente la eliminaron porque la práctica mantuvo un número relativamente elevado de mujeres en el parlamento.

Los países que inician cuotas de género por legislación tienen la ventaja de que contempla a todos los partidos políticos que contienden en los procesos electorales y, en algunos casos, consideran obligatoriedad y sanciones al incumplimiento.

En América Latina fue Argentina el primer país que incorporó las cuotas de género en su legislación en 1991. En México las cuotas de género se incorporaron en la legislación electoral de 1993 con carácter de recomendación a los partidos políticos, después de la primera discusión legislativa sobre el derecho de las mujeres a acceder a cargos más importantes.

Para 1996, en México, se estipuló que ningún partido político podría postular más del 70% de candidatos de un solo género, aunque tampoco había sanción al incumplimiento de la norma. En 2002 se obligó el cumplimiento de las cuotas, pero solo para los propietarios de las fórmulas y no a los suplentes. Posteriormente, en la reforma de 2008 se incrementó del 30 al 40% la presencia obligatoria de mujeres en las candidaturas nacionales y modificó la manera de integrar las listas por el principio de representación proporcional (en segmentos de 5 candidatos alternando los géneros), además obligó a destinar anualmente 2% de su financiamiento público para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en 2011, a favor de un fortalecido grupo de mujeres que impugnaron un acuerdo del Consejo General del IFE, hoy INE, que consideraba excepciones para el cumplimiento de la cuota, eliminó la excepcionalidad de las cuotas de género y estableció la obligatoriedad de que el 40% de las fórmulas reservadas a las mujeres estuvieran compuestas por propietaria y suplente del mismo género.

Entonces, las cuotas fueron resultado de las luchas de las mujeres por acceder al poder, no obstante, la efectividad de la cuota está relacionada con la obligatoriedad de su cumplimiento con sanciones, el que sea en puestos de titularidad, con el tipo de distrito electoral, el orden de las candidaturas, la competitividad y posibilidades electorales de cada partido en un distrito dado (Fernández, 2011). Además, el que estén plasmadas en la legislación y el sistema electoral de México no garantiza que las mujeres sean electas, primero como candidatas y, luego, en los cargos de elección popular. Y tampoco garantiza que una vez electas puedan ejercer plena y libremente el poder local, pues las presiones de cacicazgos partidistas locales, estructuras burocráticas y prácticas políticas tradicionales pueden interferir, obstaculizar y hasta violentar el ejercicio público desde el liderazgo femenino.

La paridad

La paridad se concretó en la reforma constitucional el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y con la creación de tres ordenamientos de carácter general para garantizarla de forma estandarizada en todas las entidades de la República: 1) la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe); 2) la Ley General de Partidos Políticos (LGPP); y 3) la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGDE). También lo garantiza la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME). La Legipe señala que se deberán registrar fórmulas de candidatos en propietario y suplente del mismo género, igual que las listas de representación proporcional; además, tienen que alternarse periódicamente por fórmulas de distinto género, a fin de garantizar el principio de paridad hasta agotar la lista (sistema cremallera); es decir, establece una paridad horizontal que garantiza la participación de mujeres aun cuando la candidata propietaria resulte inelegible o, habiendo asumido el cargo, renuncie a este. También, faculta al organismo nacional electoral y a los organismos públicos locales electorales para que puedan rechazar el registro en caso de que algún partido político no cumpla con la paridad, lo que lo convierte en obligatorio.

La LGPP, señala la prohibición para los partidos políticos de asignar a alguno de los géneros exclusivamente a aquellos distritos en los que haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. Para ello, se diseñaron reglas de competitividad (como los bloques de competitividad) y lineamientos que permitieran, además, evitar la discriminación y violencia política contra las mujeres. En junio del 2015, el Instituto Nacional Electoral (INE) trazó un esquema de bloques con la votación de cada partido político en el proceso electoral 2012, obligándolos a no postular exclusivamente hombres o mujeres en los 20 distritos donde hubieran obtenido la votación más baja.

En las entidades federativas no ha habido homogeneidad en el diseño, contenido ni aplicabilidad de dichas reglas y lineamientos. Tampoco en lo relacionado con la

aplicabilidad del principio de paridad en la integración de las planillas para renovar ayuntamientos, en el sentido de que la reforma constitucional la dejó en manos de éstas. Los estados que adecuaron su legislación a la aplicabilidad del principio de paridad al nacional fueron: Baja California Sur, Nuevo León, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, el Distrito Federal, Campeche, Yucatán, Tabasco, Sonora, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, el Estado de México y Morelos; estados que en 2015 tuvieron elecciones concurrentes con la elección federal.

En junio del 2019 se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros, para garantizar el derecho de las mujeres a ser postuladas en condiciones paritarias para ocupar cargos de toma de decisión en los tres poderes del estado, los tres órdenes de gobierno y los organismos autónomos, así como la postulación paritaria de candidaturas a cargos de elección popular. Asimismo, en abril del 2020 se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; para ser armonizadas con el marco jurídico en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género con el fin de lograr la materialización en su operatividad.

Cargos de representación popular que las mujeres han obtenido desde 2000

La presencia de las mujeres en los procesos electorales es resultado de las intensas luchas y acciones que han sostenido a lo largo de la historia. Sus logros se concretizan en los cargos de representación popular que han ido obteniendo en diferentes ámbitos del gobierno.

Desde antes de que el voto universal fuera aprobado en México, las mujeres obtuvieron cargos de elección popular, específicamente en la regiduría y en el congreso local, ambos en Yucatán en 1923. Posteriormente, fueron obteniendo gradualmente más cargos, primero, como diputadas federales (la primera fue electa en 1953), después como senadoras (la primera fue electa en 1964) y al final como gobernadoras (la primera fue electa en 1979).

Una vez aprobadas y puestas en marcha las cuotas de género las mujeres tuvieron, desde el marco jurídico, más posibilidades de ser postuladas para algún cargo de representación popular. Los números aumentaron un poco, pero siguieron siendo bajos. A partir del 2000 fue aumentado el número de mujeres en los cargos de representación popular, obteniéndose un despunte considerable a partir de la aprobación de la paridad de género en 2014, ante la obligatoriedad de postular igual número de mujeres y hombres en las candidaturas.

Diputadas federales

Después de la legislatura LXI (2009-2012) las mujeres en las diputaciones federales empezaron aumentar considerablemente y en las dos últimas legislaturas (2018-2021 y 2021-2024), los porcentajes se fueron acercando más la paridad (50%).

Legisladoras del 2000 a la fecha

Legislatura	%
LVIII	16
LIX	24
LX	23.4
LXI	31
LXII	37.4
LXIII	42.6
LXIV	48.2
LXV	49.2

Fuente: Elaboración propia con base en CEAMEG (2008) e INMUJERES (2019).

Senadoras

Al igual que en las diputadas federales, las senadoras se han mantenido gradualmente al alza; sin embargo, en algunas legislaturas se muestran mayores incrementos con respecto a la secuencia constante; además, de la legislatura LX cuyo porcentaje era de tan solo de 18.7 se aumentó a 49.2% en LXIV y hasta 50% en LXV.

Legisladoras del 2000 a la fecha

Legislatura	%
LVIII	15.6
LIX	15.6
LX	18.7
LXI	15.6
LXII	16.6
LXIII	17.1
LXIV	49.2
LXV	50

Fuente: Elaboración propia con base en CEAGEM (2008) y Senado de la República (20213).

Alcaldesas

Una vez aprobadas las cuotas de género fue aumentado gradualmente el número de alcaldesas, aunque no pasó del tres por ciento. Fue hasta el 2008 que alcanzó 4.5 por ciento y hasta 2015 que subió a 9.4 por ciento, una vez aprobada la paridad. En adelante, fue subiendo progresivamente hasta llegar a 25.8 en 2022.

Alcaldesas en México desde el 2000

Año	%
2000	3.7
2001	3.9
2002	3.3
2004	3.5
2006	3.8
2007	3.7
2008	4.5

2009	5.2
2010	5.2
2011	5.9
2012	6.8
2013	6.8
2014	7.3
2015	9.4
2016	14.1
2017	14.2
2018	15.9
2019	22.7
2020	21.7
2021	22.7
2022	25.8

Fuente: Vázquez (2010) y Sistema de Indicadores de Género (SIG) del Instituto Nacional de las Mujeres
https://cutt.ly/indicadores_genero

Por entidad federativa, quienes tienen mayor presencia de mujeres en el total de sus municipios son: Baja California Sur (80%), Quintana Roo (63.6%), Colima (60%), Ciudad de México (50%), Tabasco (47.1%), Campeche (46.2%) y Baja California (42.9%). Por el contrario, las entidades con menos presidencias municipales encabezadas por mujeres, en municipios que eligen autoridades por partidos políticos, son: Chiapas (13%), Tlaxcala (15%), Chihuahua e Hidalgo (17.9%), Aguascalientes (18.2%) y Nuevo León (19.6%). Todas estas con porcentajes menores al 20% (INE, 2021).

Gobernadoras

En 2004 que fue elegida Amalia Dolores García Medina para gobernar el estado de Zacatecas, ya habían sido elegidas cuatro gobernadoras con anterioridad. En 2021 se eligió el mayor número de gobernadoras y en 2023, por primera vez es elegida en el Estado de México una mujer para gobernar y el PRI pierde la gubernatura.

Gobernadoras en México 2000-2023

Año	Nombre	Estado	Partido
2004	Amalia Dolores García Medina	Zacatecas	PRD
2008	Ivonne Aracelly Ortega Pacheco	Yucatán	PRI
2015	Claudia Artemiza Pavlovich Arellano	Sonora	PRI
2018	Claudia Sheinbaum Pardo	CDMX	Morena
2021	María Eugenia Campos Galván	Chihuahua	PAN
	Marina del Pilar Ávila Olmeda	Baja California	Morena
	Evelyn Cecia Salgado Pineda	Guerrero	
	Indira Vizcaino Silva	Colima	
	Layda Elena Sansores San Román	Campeche	
2023	Delfina Gómez Álvarez	Estado de México	M-PT-PVEM

Fuente: Elaboración propia con base en INMUJERES (2019).

Conclusiones

Las prácticas políticas que las mujeres emprendieron para acceder al poder estuvieron permeadas por elementos culturales que les obstaculizaron y hasta torturaron. Fundamentalmente, por considerar que la política no pertenecía a la esfera natural de las mujeres.

La primera conquista de las mujeres fue el derecho a votar, después fue la posibilidad de ser elegida en algún cargo de representación popular. En México se logró en 1953 y más tarde se realizaron algunas modificaciones al marco jurídico para robustecer que fueran propuestas como candidatas, primero con las cuotas y luego con la paridad.

El número de mujeres en los cargos de representación popular fueron aumentando gradualmente con la aplicación de las cuotas y la paridad. A partir del 2000 se pueden registrar los mejores números, aunque con la paridad aumentaron considerablemente.

Las senadurías son las que mayor avance han tenido en función de la paridad; obteniendo en la actual legislatura (LXV) el 50-50; le siguen las diputaciones federales, puesto que para la última legislatura las mujeres tienen 49.2%, frente al 50.8% de hombres. En el caso de las alcaldesas se tiene que en el 2000 solo tenían 3.7% y para el 2022, 25.8%.

Los cargos de representación popular en los que las mujeres más lentamente han avanzado para alcanzarlas son las gubernaturas, hasta el 2018 se mantuvo una mujer, actualmente representan el 18.7%.

Si bien las mujeres han logrado avances significativos, la paridad de género en la política está lejos de lograrse, a pesar de que ya esté estipulada el marco jurídico. Mucho se debe a la resistencia puesta por quienes deben implementar las normas, es decir, los partidos políticos, ya que si bien cumplen con lo estipulado siguen sin modificar los modos de asignar las candidaturas. Tan es así que en el momento de que a las mujeres se les tiene que asignar candidaturas, en cumplimiento a la ley de paridad, lo decide, mayoritariamente, un grupo reducido compuesto principalmente por hombres, quienes las ubican como suplentes y cuando las ubican como propietarias lo hacen en espacios territoriales sin mucha relevancia económica y política.

También, se debe a que un gran número de electores sigue sin apostar por las mujeres como sus representantes, siguen poniendo en duda su capacidad para tomar decisiones públicas y, en general, ubicándolas en el espacio privado y en su papel de reproductoras y cuidadoras del hogar y sus integrantes. O bien a que las propias mujeres decidan no participar por no dejar de cumplir con su papel tradicional asignado o por lo menos no en puestos que les impliquen más responsabilidades.

Se requiere avanzar en la transformación de las prácticas político-electorales que reproducen los roles tradicionales de mujeres y hombres y colocan a las mujeres en desventaja para acceder y ejercer sus derechos políticos.

Bibliografía

Bareiro, Line y Soto, Lilian (s/f) *Igualdad de género mediante políticas públicas en Estados inclusivos en el marco de la Agenda 2030*. Inmujeres, ONU Mujeres, OIT, CEPAL, UNFPA, PNUD, Ministerio de Desarrollo Social, Cooperación Española.
http://americalatinagenera.org/newsite/images/ESTADOS_INCLUSIVOS.pdf

Cano, Gabriela (2013) “Debates en torno al sufragio y la ciudadanía de las mujeres en México”, *Estudios Sociológicos XXXI: Número extraordinario*.
<https://estudiossociologicos.colmex.mx>

De Miguel Álvarez, Ana (2000) Movimiento feminista y redefinición de la realidad. Asamblea de mujeres de Córdoba (Ed.), *Feminismo es.... Y será,* pp.97-104.

Castaño Sanabria Dennyris (2016) El feminismo sufragista: entre la persuasión y la disrupción, Polis. Revista Latinoamericana, 43.
<http://journals.openedition.org/polis/11600>

CEAMEG (2008) *Número de diputadas y senadoras por legislatura desagregadas por partido político*, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género Cámara de Diputados, México.
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/Inv_Finales_08/DP1/1_19.pdf

Fernández Poncela, Anna María (2011) Las cuotas de género y la representación política femenina en México y América Latina. *Argumentos* (México, D.F.), 24(66),

pp. 247-274.http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952011000200010&lng=es&tlng=es.

Girón, Alicia; González Marín, María Luisa y Jiménez, Ana Victoria (2008) Breve historia de la participación política de las mujeres en México, González Martín, María Luisa y Rodríguez López Patricia (coordinadoras) *Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD.*, Edit. Miguel Ángel Porrúa, UNAM, IIE, CONACY, UAM, INMUJER: México. [http://ru,iiec.unam.mx](http://ru.iiec.unam.mx)

INMUJERES (2019) *Cuadernillo temático. Las mujeres en la legislatura de la paridad*, Instituto Nacional de la Mujeres. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Cuadernillo_I_%202019%20.pdf

Senado de la República (2013) *Senadoras de México 1958-2012*, Senado de la República LXLII Legislatura/Instituto Nacional de las Mujeres. http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/2946/Senadoras_Mexico.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Torres Falcón Marta (2009) Breve estudio comparativo de la participación política de las mujeres en el mundo contemporáneo, Comisión Nacional de Derechos humanos, *Participación política de la mujer en México*, Comisión Nacional de Derechos humanos.

Vázquez García, V., (2010) "Mujeres y gobiernos municipales en México. Lo que sabemos y lo que falta por saber", *Gestión y Política Pública*, XIX(1), pp. 111-154. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13315771004>

Velázquez Ramírez, Adrián (2013) Espacio de lucha política: teoría política y el giro espacial, *Argumentos*, 26(73), pp. 175-195. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952013000300010&lng=es&tlng=es.